

La oposición en un régimen presidencial

Los grandes debates jurídicos en Colombia no se dan solamente por la capacidad de concebir instituciones nuevas o sostener las históricas, sino por esa inveterada y malsana tendencia a traer conceptos foráneos sin mayor análisis comparativo, ni constitucional. En ese punto, cabe hacerse una reflexión sobre el recientemente expedido “Estatuto de Oposición” a través de la Ley 1909 del 2018.

La Constitución Política de 1991 estableció la oposición como un derecho fundamental consagrado en los artículos 40 y 112. Eso está bien. Pero lo que sí es un dislate constitucional es haber expedido un estatuto que parece ser hecho para un régimen parlamentario y no para un sistema presidencialista. La creatividad constitucional es adecuada, pero siempre teniendo en cuenta que el derecho comparado no permite acoger a pie juntillas las instituciones foráneas, sino estudiarlas para efecto de comprender las diferencias y no poner al país ante escenarios de inaplicación o incomprensión constitucional.

La oposición y los estatutos de oposición tienen sentido en regímenes parlamentarios y con un sistema de partidos organizados donde prime el bipartidismo. En ese tipo de sistemas, hemos visto, en especial en algunos países europeos, existe un funcionamiento adecuado y, en otros, un desmadre que invita de forma permanente al fraccionamiento político, por



FRANCISCO BARBOSA

Ph.D. en Derecho Público
Universidad de Nantes (Francia).
Docente Universidad Externado,
@frbarbosa74

“... lo que sí es un dislate constitucional es haber expedido un estatuto que parece ser hecho para un régimen parlamentario y no para un sistema presidencialista”.

ejemplo, los casos de Italia, Grecia y, recientemente, el de España. En regímenes presidenciales sin partidos en adecuado funcionamiento como el caso colombiano, la cosa no es tan simple.

Veamos algunos elementos de su normativa que son esenciales para comprender este desacertado instrumento.

1. Es un Estatuto de Oposición que no señala la existencia de jefes de oposición. En ese sentido, debe recordarse que en la ley no existe esa figura, que es propia de lugares

donde el parlamentarismo y los partidos existen de forma ordenada. Sectores de oposición tendrán que conformarse con dividir esa “oposición” y convertirse a la luz de la ley en “oposiciones” que por lógica se fraccionarán en el marco de lo desarrollado por la ley.

2. Dentro del mes siguiente al inicio del próximo gobierno del presidente Iván Duque, las organizaciones políticas tendrán que declararse en oposición, ser independientes o ser parte del gobierno para efectos de derivar de sus acciones varias prerrogativas jurídicas.

3. Solo podrán ser oposición los partidos o movimientos políticos con personería jurídica, de tal forma que alianzas o coaliciones que sirvieran de vehículo para presentarse en las elecciones no podrán utilizarse para declararse en oposición. Cada partido y movimiento tendrá su propio vocero.

4. El hecho de habérseles otorgado dos curules —una en el Senado y otra en la Cámara de Representantes— a la fórmula derrotada en las elecciones presidenciales no los hace voceros únicos de oposición. Tendrán que ir al Congreso a batallar por su liderazgo.

5. Según la normativa, ser parte de la oposición tiene varios derechos de acuerdo con el artículo 11 de la mencionada ley, por ejemplo: financiación adicional para el ejercicio de la

PÁG. 15 ►►

Los 10 grandes mandamientos del buen árbitro

— Primer mandamiento: “Preservar el ordenamiento legal”. En nuestro medio, por definición constitucional y jurisprudencial, el árbitro ejecuta actos indiscutiblemente jurisdiccionales, por ende, dentro del trámite arbitral, se deben desplegar rigurosamente las reglas propias de esa instancia y las que se aplican por analogía.

— Segundo mandamiento: “Observar que los acuerdos celebrados entre las partes lo vinculan”. Esto en especial, en lo concerniente a la modulación del pacto arbitral, y en especificidades como el tipo de arbitraje por adelantado, las calidades y el número de árbitros, el centro de arbitraje competente para ventilar la controversia, el término para proferir el laudo arbitral y las reglas de procedimiento pactadas para desplegar el trámite.

— Tercer mandamiento: “Motivar debidamente todas las decisiones”. Ello tiene por equivalente fundar adecuadamente las determinaciones arbitrales con base en preceptos jurídicos aplicables y vigentes,

analizando en cada caso las posturas de los sujetos procesales y emitiendo las determinaciones con resoluciones coherentes, no contradictorias, y que resulten ejecutables.

— Cuarto mandamiento: “Ser activo y tener capacidad para anticiparse a vicisitudes o complejidades



HERNANDO HERRERA MERCADO

Árbitro y miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá

del trámite”. El árbitro no es un convidado de piedra en el trámite arbitral ni un mero espectador del quehacer procesal de las partes, por ello, a pesar de que el arbitraje tiene origen consensuado, sin cuya voluntariedad no dimana la habilitación del árbitro, la normativa le asigna la indelegable misión de impulsar el trámite, por lo que debe tener el carácter y la determinación necesarias para que el procedimiento arbitral esté librado de sabotajes y de cualquier tipo de contrariedades.

— Quinto mandamiento: “Ofrecer plenas garantías procesales sin que ello vaya a mermar la eficacia del procedimiento arbitral”. El árbitro debe propender por el respeto al debido proceso de manera proporcionada, evitando que por esa instancia se vaya a truncar o a sustituir el procedimiento reglado bajo cuyo imperio se debe asegurar la debida conducción arbitral y sus resultados.

— Sexto mandamiento: “Ejercer las facultades otorgadas a los árbitros con firmeza y carácter”. La función arbitral debe ejecutarse con aplicación estricta de las normas concernientes al asunto bajo conocimiento y con la necesaria determinación que le haga inferir a las partes que se está ante una juiciosa conducción arbitral, evitando dubitaciones o contradicciones en el manejo procesal, y rechazando de plano recursos abiertamente improcedentes, la solicitud de pruebas superfluas, inconducentes o extemporáneas, o las conductas tejidas para evadir las órdenes del tribunal.

— Séptimo mandamiento: “Evitar las interferencias indebidas de la jurisdicción ordinaria dentro del trámite arbitral”. Lo anterior no supone que los jueces no puedan coadyuvar la tarea arbitral ni intervenir en su suceso cuando sea del caso, pero por supuesto dentro de los parámetros legales y en ejercicio de la llamada figura del auxilio judicial, destinado a concretar frente a algunas actuaciones o actos procesales la asistencia o

PÁG. 15 ►►

El encuentro entre el Derecho de los Negocios y los emprendimientos sociales

En nuestro medio, los abogados no siempre nos mostramos dispuestos a incursionar en figuras legales que signifiquen un cambio

en los fundamentos de nuestra tradición. Es el caso de la Ley de Garantías Mobiliarias, un reciente instrumento jurídico que permite la constitución de gravámenes sobre cualquier activo mueble, presente o futuro, tangible o no. Con esta figura se está haciendo una transformación radical al derecho de garantías, al tiempo de facilitarse la irrigación de recursos a emprendedores y microempresarios, por lo general excluidos del circuito crediticio tradicional, pues con la nueva ley hacen de sus activos muebles, la palanca financiera que exige el crecimiento de sus negocios.

También recientemente supimos de la sanción de la Ley de Sociedades BIC (o de beneficio e interés colectivo). A través de ellas se ofrece un marco legal para las actividades que van en pos del bienestar general, por oposición al interés privado característico de las sociedades comerciales. Muchos se han preguntado sobre la utilidad de la nueva figura, pues las iniciativas que buscan el beneficio común bien podrían constituirse como entidades sin ánimo de lucro (Esal). Sin embargo, si algo



ADRIANA ZAPATA
Doctora en Derecho

“... las franquicias sociales son ejemplos de la proyección social que el Derecho Privado puede tomar”.

hay que vale la pena subrayar es que el régimen jurídico de las Esal es francamente precario, lo que lleva con frecuencia a recurrir a las normas mercantiles para regular por analogía los asuntos más elementales del día a día de estas entidades. Esta constatación confirma la pertinencia de la Ley BIC y nos da pie para plantear que la doctrina debería aproximarse a su estudio, no buscando encontrar en ellas más de lo mismo, sino explorar con mente abierta sus posibilidades, sin olvidar que fueron construidas sobre un paradigma distinto para el cual es central el beneficio colectivo, antes que el lucro

particular.

Paso ahora a referirme a las franquicias sociales, queriendo con ello hacer un reconocimiento al emprendimiento de Catalina Escobar, a través de la Fundación Juanfe, por ella creada en la ciudad de Cartagena. Acostumbrados como estamos a solazarnos con la visión de la Ciénaga de la Virgen desde el norte de esa ciudad, no alcanzamos a imaginar lo que acoge este bellísimo paraje desde la orilla de sectores como el Nuevo Paraíso, donde se encuentra la invasión Bendición de Dios, nombre que no es más que un triste eufemismo para ocultar el abandono del hombre por el hombre, confinándole a lugares donde ni las políticas públicas ni la ley habitan; tan solo la desesperanza de cientos de colombianos desprovistos de las más elementales condiciones de vida digna.

Las iniciativas exitosas como la Fundación Juanfe, a través de sus años de experiencia logran desarrollar un modelo de gestión social que amerita ser emulado, lo cual es posible, ya que los procedimientos pueden ser estandarizados y llevados a instructivos en los que se consigna la forma de trabajar con el capital humano, conformado en este caso por madres adolescentes y de niños y niñas cartageneros,

PÁG. 15 ►►